

Santiago, doce de agosto de dos mil veinticuatro.

Al folio 14, téngase presente.

Vistos:

Por sentencia de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago en los autos RIT O-41-2023, caratulados “Criado con Municipalidad de Renca”; se acogió la acción de reconocimiento de relación laboral, despido injustificado y cobro de prestaciones en favor de don Elías Criado Negrete, rechazándose la acción de nulidad del despido.

La parte demandada impugna la sentencia, a través de las causales del artículo **478 letras b) y e)** del Código del Trabajo, en la parte que declara la relación laboral y condena por despido injustificado.

Por su parte, la demandante invoca la causal contemplada en la segunda parte del inciso primero del artículo **477** del Código del Trabajo, por el rechazo de la nulidad del despido.

Declarados admisibles los recursos, se procedió a su conocimiento en la audiencia del cuatro de julio último, oportunidad en que alegaron los abogados de ambas partes.

Considerando:

I.- Recurso de la demandada.

Primero: Que la demandada funda su recurso, en la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, esto es, cuando la sentencia haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

Alega que la sentencia omite la circunstancia de existir un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social del cual nacían los programas a los que estuvo adscrito el actor, al tiempo que se acusa la omisión de prueba documental que no fue si quiera individualizada en el cuerpo de la sentencia y la preterición del relato de los testigos del propio demandante que señalaron que éste no cumplía ni registraba horario, entre otros medios de prueba.

Agrega que la sentencia no señala como llega a la conclusión que el actor realizaba una función de naturaleza genérica y no toma en cuenta que lo relativo al Registro Social de Hogares pertenece al Ministerio de Desarrollo Social, siendo el municipio quien desarrolla un “convenio mandato”.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CJXGXPBYCWH

Segundo: Que de un modo persistente y reiterado se ha venido indicando por esta Corte que la causal del artículo 478 b) busca controlar el *razonamiento probatorio* contenido en la sentencia, con miras a verificar que en esa actividad no se hayan contrariado o vulnerado los parámetros de la lógica, de la técnica, de los conocimientos científicos o de las reglas de experiencia. Expresado en otros términos, de lo que se trata es de fiscalizar que *las razones* vertidas por el juzgador respeten esos lineamientos. Para ese fin, el recurrente ha de ser capaz de demostrar el error, precisando en su impugnación cuáles hechos estarían incorrectamente fijados en el fallo y, sobre todo, la causa de ese error.

Tercero: Que, desde esa óptica, no puede ser atendida la recurrente cuando hace consistir la causal en la circunstancia de no haberse tomado en cuenta determinados medios de prueba, es decir, que no fueron valorados, porque si ello fuera efectivo querría decir que el vicio es de otro orden o naturaleza. Tampoco puede considerarse el reproche del recurso cuando acusa que la sentencia no ha motivado su decisión, pues el ámbito de la causal dice relación con una errada motivación probatoria del fallo y no con la ausencia de ésta. Un vicio de esa naturaleza –de ser efectivo–, importa el incumplimiento de requisitos previstos en la ley para el pronunciamiento de una sentencia y, por ende, resultan extraños a la causal de nulidad que se hace valer.

Cuarto: Que, en subsidio, se hace valer la causal 478, letra e), en relación con el artículo 459 N° 4 del Código del Trabajo, esto es, por omitir el análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esta estimación.

Respecto de esta causa reitera la alegación referida a la ausencia de análisis de la prueba rendida por su parte, contrariamente a lo que ocurre con la prueba de la parte demandante y la falta de explicación de los motivos por los cuales esta fue desestimada y se arribó a la decisión condenatoria.

Quinto: Que si bien, efectivamente, en la sentencia no existe un análisis de cada documento aportado ni tampoco un pronunciamiento sobre el relato de cada testigo, el razonamiento probatorio parte de un hecho inconcuso, cual es que el actor fue contratado para labores de “encuestador” en el programa del registro Social de Hogares de la Municipalidad, labores



que luego fueron ampliadas a las de “Apoyo administrativo” y más adelante a la “atención de casos” y otros relacionados con la plataforma del Registro Social de Hogares. Tales labores la sentenciadora las calificó como fuera del marco habilitante de la contratación a honorarios (que requiere labores específicas y accidentales), tanto por el lapso de 10 años de servicios, la naturaleza genérica de las funciones y teniendo especialmente presente que el programa del Registro Social de Hogares es habitual y permanente en la Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio. De este modo, no se observa la falta de motivación que sugiere parte del recurso.

Sexto: Que no puede olvidarse tampoco que, como toda nulidad, este arbitrio responde al imperativo de la relevancia, en el sentido que no basta la verificación de un vicio para disponer la invalidación de un fallo. Esto que se dice está expresado en el mismo artículo 478 del Código del Trabajo, cuando se indica que *“No producirán nulidad aquellos defectos que no influyan en lo dispositivo del fallo...”*.

Por lo tanto, la labor del recurrente no se agota en la sindicación del vicio sino que comprende también el deber de demostrar la incidencia que el mismo tendría en la decisión. En ese orden de ideas, cabe consignar que en su impugnación el recurrente no entrega descripciones de la prueba que se dice omitida ni cómo ella sería capaz de alterar la decisión. Tampoco se extiende a explicar qué examen o razonamiento probatorio habría conducido a una conclusión distinta de la alcanzada por la jueza en su fallo, de manera que la pretendida influencia que menciona en su recurso deviene en una afirmación desprovista de respaldo.

Séptimo: Que, por lo demás, se advierte que lo que realmente pretende la demandada es que esta Corte realice una nueva revisión de los medios de prueba y llegue a una conclusión diversa a la de la instancia, lo que no se condice con el medio de impugnación que el legislador ha establecido.

II.- Recurso de la demandante.

Octavo: Que se invoca el motivo de nulidad de infracción de ley el artículo 477 del Código del Trabajo, por vulneración artículo 162 del Código del Trabajo en relación con el artículo 1º y 58 Inc. 1º del mismo Código y los artículos 17 y 19 del Decreto Ley 3.500, al rechazar el tribunal la aplicación de la nulidad del despido.



Sostiene que al no haberse pagado las cotizaciones por el empleador es procedente aplicar las sanciones que establece el legislador en el artículo 162 incisos 5° y 7° del Código del Trabajo, por cuanto en la especie nos encontramos ante una relación de carácter laboral donde el empleador no ha informado ni pagado las cotizaciones previsionales del que fue su dependiente y, por tanto, su despido no sólo sería injustificado, sino que también adolece de ser nulo.

Noveno: Que como se ha sostenido por esta Corte, la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, sobre infracción de ley, tiene como finalidad velar porque el derecho sea correctamente aplicado a los hechos o al caso concreto determinado en la sentencia. En otras palabras, su propósito esencial está en fijar el significado, alcance y sentido de las normas, en función de los hechos que se ha tenido por probados.

Décimo: Que respecto del tema que propone el recurso, baste señalar que, siendo un hecho asentado que existe una relación laboral que no tuvo tratamiento como tal y - por ende- no se pagaron cotizaciones, esta Corte adhiere al criterio asentado por nuestro máximo tribunal a partir de los antecedentes N°41.500-2017 y, últimamente, en los ingresos N° 4.440-2019 y 21.989-2021, entre muchos otros, en que se ha declarado que tratándose de relaciones laborales que tienen como fundamento la celebración de contratos a honorarios con órganos de la Administración del Estado -entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575-, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la punición de la nulidad del despido, esto es, que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgó una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido.

Además, se ha considerado que la aplicación -en estos casos- de la institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público,



convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido.

En estas condiciones, no yerra la sentenciadora del grado al concluir que, en el caso, no se configura la hipótesis que sustenta la sanción de la nulidad del despido, regulada en el artículo 162, incisos 5°, 6° y 7° del Código del Trabajo, por lo que corresponde desestimar el recurso también en este apartado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas y en los artículos 479, 481 y 482 del Código del Trabajo, **se rechazan** los recursos de nulidad deducidos por ambas partes, en contra de la sentencia de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT O-41-2023.

Acordada, en lo que respecta al rechazo del recurso del demandante, con el voto en contra de la ministra señora Lilian Leyton Varela, quien estuvo por acoger la causal del artículo 477 del Código del Trabajo y anular el fallo en la parte que rechaza la acción de nulidad del despido, dictando sentencia de reemplazo que haga lugar a la misma, por las siguientes consideraciones:

1°.- Que, como se observa, más allá de lo planteado en los instrumentos escritos, en especial de los contratos celebrados por las partes, los respectivos decretos administrativos que los autorizan y demás aparejados, fluye que en los hechos, esto es, en el devenir material y concreto en que se desarrolló la vinculación referida, se configuró una de naturaleza laboral, al concurrir en la práctica los indicios que dan cuenta de dicho enlace, conforme el artículo 7° del Código del Trabajo, tal como lo estableció de manera incuestionable el juez a quo, pues la prestación de servicios de autos, se desarrolló fuera del marco legal y estricto que permitía al demandado la contratación de la actora.

2°.- Que así asentada la calificación del contrato y las normas de carácter laboral que, por tanto, rigen la relación entre las partes, del mérito de autos también se desprende que el empleador no dio cumplimiento a la obligación establecida en el inciso quinto del artículo 162 del Código del Trabajo. Y, en consecuencia, corresponde aplicarle la sanción que la misma disposición contempla en su inciso séptimo.



Esto, en tanto el fallo del grado que constató la existencia de una relación de naturaleza laboral entre las partes, sólo vino a reconocer una situación que, en los hechos, ya existía. Lo que, por consiguiente, impide entender que sólo a partir de la decisión jurisdiccional nazcan los derechos y obligaciones de índole laboral. Pues, ellas han existido desde el origen del vínculo, cualquiera sea la denominación que las partes le hubieran conferido.

3°.- Que por otra parte, a este respecto ni siquiera hace falta recurrir al principio protector del trabajador para llegar a la conclusión que se viene razonando; por cuanto ella es consecuencia directa de la correcta e indubitada calificación hermenéutica de la relación laboral. Y, en tal entendido, no puede perderse de vista que la norma del artículo 162 del Código del Trabajo, para que proceda la sanción de su inciso séptimo, no hace distinción entre una relación laboral declarada o no; ni tampoco si el empleador retuvo o no el monto de las cotizaciones correspondientes. De manera que basta como supuesto de hecho para la norma sancionatoria, que en la relación laboral el empleador no entere las cotizaciones de seguridad social, para que haya lugar a la aplicación de la llamada Ley Bustos. Lo que evidentemente resulta procedente en la especie, en tanto que –como ya se expresó–, es un hecho de la causa que dichas cotizaciones no fueron enteradas por quien debía hacerlo.

4°.- Que, además, una interpretación como la propuesta en el fallo implica entender que existen distintas categorías de trabajadores y, por ello, una desigualdad ante la ley entre estos. Pues, esta distinción equivale a sostener que a aquellos trabajadores que se vinculen con el Estado les resulta más gravosa la contratación que a los otros que lo hagan con un empleador particular; pues, a los órganos de la Administración, aun cuando incumplan normas de orden público precarizando en extremo el trabajo, les sería admitido desde ya, bajo el pretexto de carecer de normativa especial que les hubiera permitido hacer los pagos de cotizaciones durante la vigencia de la relación laboral y luego convalidar el despido, tener vinculados a sus trabajadores bajo subordinación y dependencia, pero sin cumplir con las obligaciones y cargas que corresponden a todo empleador según el Código del Trabajo.

5°.- Que en este mismo orden de ideas, el razonamiento rebatido en el basamento anterior, según el cual al órgano administrativo le habría sido



imposible, por falta de ley que lo permita, haber ido pagando las correspondientes cotizaciones durante la vigencia de la relación laboral, implica una contradicción insalvable en el intérprete que lo sostenga. Por cuanto, se habría afirmado, por un lado, que la relación con el trabajador puede ser calificada lícitamente como laboral, pero que un aspecto fundamental de su cumplimiento sería inexigible al empleador cuando este sea un órgano administrativo, porque correspondería a una conducta que la ley no permite; es decir, a una conducta ilegal, bajo el principio de que en derecho público solo se puede hacer aquello que está expresamente autorizado por la ley. Pero lo cierto es que, si esto último fuera así, como se afirma al pretender justificar y no sancionar el no pago de cotizaciones, entonces ello no podría querer decir sino que tampoco habría sido posible sostener previamente que la relación de prestación de servicios podía calificarse como un contrato de trabajo: tanto una cosa como la otra adolecerían del mismo supuesto problema de nulidad de derecho público; lo que, habida cuenta de que ya se había afirmado que la relación sí era de carácter laboral, haría incurrir en decisiones irreductiblemente contradictorias, al negar dicho carácter para esta segunda cuestión, que no es sino una consecuencia de la primera.

6°.- Que en consonancia con lo razonado, existe el yerro denunciado por el actor al rechazar la acción de nulidad del despido ni ordenar el pago de las cotizaciones de seguridad social, precisamente porque en la especie concurrían los supuestos para la aplicación al caso del artículo 162 del Código del Trabajo en sus incisos 5, 6 y 7, de manera que todas las disquisiciones que contiene el fallo rebatido, ceden irreductiblemente frente al estatuto llamado a resolver el asunto, según se señaló, pues la existencia de la relación laboral supone la obligación del empleador de enterar las cotizaciones previsionales respectivas a partir del comienzo de la misma.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la ministra (s) señora Díaz Urtubia y del voto en contra, su autora.

Laboral-Cobranza N° 2796-2023.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CJXGXPBYCWH



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CJXGXPBYCWH

Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Lilian A. Leyton V., Alejandro Aguilar B. y Ministra Suplente Paola Cecilia Diaz U. Santiago, doce de agosto de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a doce de agosto de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

